

Catatumbo, frontera, paramilitarismo y disputa geopolítica en el norte de Suramérica

Catatumbo, border, paramilitarism, and geopolitical dispute in northern South America

Insuasty Rodríguez, Alfonso; Díaz-García, Freddy; Vallejo Duque, Yani

 **Alfonso Insuasty Rodríguez**

Alfonso.insuasty@gmail.com

Universidad de San Buenaventura,
Colombia

 **Freddy Díaz-García**

freddydiazga@gmail.com

Cedins, Colombia

 **Yani Vallejo Duque**

yaniw6@gmail.com

Grupo Kavilando, Colombia

Resumen:

Se analiza la guerra en el Catatumbo como un fenómeno estructural inscrito en una estrategia geopolítica regional que desborda las lecturas centradas en la criminalidad o la debilidad estatal. Desde un enfoque crítico y decolonial, sostiene que el avance paramilitar, articulado al narcotráfico y las economías extractivas, responde a un reordenamiento territorial funcional a intereses externos, en particular a la agenda de seguridad de Estados Unidos. Se argumenta que el ELN ha operado históricamente como un dique armado frente a la instrumentalización de la frontera colombo-venezolana, por lo que la intensificación del conflicto se interpreta como parte de una estrategia contrainsurgente prolongada orientada a neutralizar esa resistencia. Este trabajo invita a ampliar los marcos analíticos del campo de los estudios sobre conflicto y seguridad, habilitando hipótesis evidentes, pero sistemáticamente evitadas en contextos de polarización y extremismo, y subrayando la centralidad de territorios como el Catatumbo y Venezuela en la disputa contemporánea por la soberanía regional en un escenario de confrontación multipolar.

Palabras clave: Catatumbo; Contrainsurgencia; Paramilitarismo; Frontera colombo-venezolana; Geopolítica; Militarización; Resistencias territoriales; Orden multipolar.

Abstract:

The war in Catatumbo is analyzed as a structural phenomenon inscribed in a regional geopolitical strategy that goes beyond interpretations focused on criminality or state weakness. From a critical and decolonial perspective, it argues that the paramilitary advance, linked to drug trafficking and extractive economies, responds to a territorial reorganization that serves external interests, particularly the security agenda of the United States. It argues that the ELN has historically operated as an armed bulwark against the instrumentalization of the Colombian-Venezuelan border, and therefore interprets the intensification of the conflict as part of a prolonged counterinsurgency strategy aimed at neutralizing that resistance. This work invites us to broaden the analytical frameworks of the field of conflict and security studies, enabling obvious hypotheses that are systematically avoided in contexts of polarization and extremism, and highlighting the centrality of territories such as Catatumbo and Venezuela in the contemporary dispute over regional sovereignty in a scenario of multipolar confrontation.

Keywords: Catatumbo; Counterinsurgency; Paramilitarism; Colombian-Venezuelan border; Geopolitics; Militarization; Territorial resistance; Multipolar order.

Revista Kavilando

Grupo de Investigación para la Transformación Social Kavilando, Colombia

ISSN: 2027-2391

ISSN-e: 2344-7125

Periodicidad: Semestral
vol. 17, núm. 2, 2025

revista@kavilando.org

Recepción: abril de 2025

Aprobación: junio de 2025

Doi: [10.69664/kav.v17n2a549](https://doi.org/10.69664/kav.v17n2a549)

Introducción¹

Desde finales del siglo XX, y de manera decisiva a partir de 1999 con la implementación del Plan Colombia, diseñado, financiado y orientado estratégicamente por Estados Unidos, la frontera nororiental de Colombia experimentó un profundo proceso de reconfiguración territorial. Bajo el discurso hegemónico de la “lucha contra el narcotráfico”, se consolidó un modelo de militarización estructural articulado a un patrón extractivista, cuyos efectos más visibles fueron el desplazamiento forzado de poblaciones campesinas, la criminalización de economías de subsistencia y la profundización de la pobreza estructural en las regiones fronterizas (Isacson, 2013; Lindsay-Poland, 2018). Lejos de resolver las causas históricas del conflicto armado, este modelo reforzó relaciones de dependencia, subordinación geopolítica y pérdida de soberanía.

Dicha implementación llegó, curiosamente con la decisión de las Autodefensas unidad de Colombia AUC también para 1999, con la creación de un nuevo bloque denominado Bloque Catatumbo (BC). Este que inicio con al menos 270 hombres, fue una estructura compuesta por al menos cuatro frentes desplegados en 30 municipios, bajo el mando de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como el Iguano. (CNMH, 2023).

Su accionar estuvo plagado de masacres e intimidación a la población civil con el propósito de hacerse al negocio del narcotráfico desde el mismo comienzo como lo son los cultivos y procesamiento hasta lograr un control fronterizo. Todo esto logró ser corroborado una vez se logra su desmovilización para el año 2004 el 10 de diciembre, cuando ya contaban con 1437 hombres en armas, lo cual lo habría sido posible sin una ayuda muy activa por parte de las autoridades de policía y militares. (La República, 2013).

El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander y en la frontera colombo-venezolana (ver figura 1), ha sido históricamente un espacio estratégico de disputa económica, social y política (Comisión de la Verdad, 2022). Su localización geográfica, sumada a la abundancia de bienes naturales como petróleo, carbón, gas y extensas tierras aptas para monocultivos industriales, lo ha convertido en un territorio clave para los procesos de acumulación de capital. Sin embargo, los beneficios derivados de esta explotación han

sido apropiados de manera casi exclusiva por élites nacionales y empresas transnacionales, reproduciendo desigualdades históricas y manteniendo a las comunidades locales en condiciones persistentes de exclusión social, económica y política (Comisión de la Verdad, 2022).

Mapa 1

Localización del Catatumbo



Fuente: Autores (2025).

Desde comienzos del siglo XX, la explotación petrolera marcó de forma decisiva el destino del Catatumbo. La Concesión Barco de 1905 abrió paso a la instalación de empresas extranjeras como la Colombian Petroleum Company (Colpet) y la South American Gulf Company (Sagoc), dando inicio a procesos de despojo territorial, deforestación acelerada y una colonización petrolera orientada fundamentalmente a intereses foráneos (Ronderos, 2014). La infraestructura estratégica construida en ese período, como el oleoducto hacia Coveñas, consolidó a la región como un enclave energético. Aunque en 1955 el control formal

de la actividad pasó a manos de Ecopetrol, la estructura de concentración de beneficios y la exclusión social de las comunidades locales permanecieron prácticamente intactas.

El carbón constituye otro eje central de la economía extractiva regional. Norte de Santander cuenta con importantes reservas carboníferas y una producción orientada mayoritariamente a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos y la Unión Europea (UPME, 2022). Si bien la minería genera empleo y regalías, su impacto real sobre el bienestar local ha sido limitado, mientras que los costos ambientales y sociales, especialmente derivados de la minería ilegal y de la política minera vigente, han recaído desproporcionadamente sobre las comunidades, generando pasivos ambientales y conflictos sociales en varias regiones del país (Contraloría General de la República, 2013).

A este entramado se suma la expansión del monocultivo de palma de aceite, impulsada durante el Plan Colombia y promovida por programas de cooperación internacional, particularmente de USAID, bajo el discurso del “desarrollo alternativo” (Lindsay-Poland, 2018). Aunque el sector palmicultor tiene un peso significativo en el PIB agrícola regional, su consolidación ha estado acompañada de despojo de tierras, violencia paramilitar y desplazamiento forzado, un patrón ampliamente documentado en múltiples regiones del país (Verdad Abierta, 2015).

Los procesos de Justicia y Paz, los informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los hallazgos de la Comisión de la Verdad han evidenciado de manera consistente cómo sectores empresariales se beneficiaron directa o indirectamente de la acción de actores armados ilegales que garantizaron el control territorial mediante la violencia. El resultado ha sido un saldo masivo de víctimas, la concentración de la propiedad y una profunda fractura del tejido social en el Catatumbo (Comisión de la Verdad, 2022).

Más allá de su dimensión local, el Catatumbo se inserta de forma central en una disputa geopolítica regional y global. Su ubicación estratégica como corredor fronterizo con Venezuela, país que posee las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo, lo convierte en un territorio clave para el control energético y la proyección de poder. En este contexto, Estados Unidos ha buscado reafirmar su influencia en América Latina frente al

ascenso de China y Rusia, promoviendo una agenda de seguridad que refuerza la militarización del territorio colombiano y su papel como enclave estratégico (Tickner, 2016).

La narrativa oficial que reduce la conflictividad regional a un problema estrictamente asociado al narcotráfico oculta las complejas relaciones existentes entre grupos armados, sectores de la Fuerza Pública, élites económicas, clanes políticos regionales y agencias extranjeras. Informes recientes, como el de la Caravana Humanitaria por el Catatumbo (REDHER, 2024), han documentado denuncias sobre la connivencia entre sectores estatales y estructuras armadas de carácter paramilitar, como el Clan del Golfo herederos de las AUC con su bloque Catatumbo, así como alianzas tácticas con determinadas disidencias armadas, dinámicas que facilitan la expropiación territorial y perpetúan la exclusión histórica.

La hoja de coca como economía de supervivencia

En un contexto prolongado de abandono estatal, el cultivo de hoja de coca se ha convertido en una economía de supervivencia para miles de familias campesinas del Catatumbo. La ausencia de infraestructura, inversión pública sostenida y alternativas productivas viables ha dejado a las comunidades sin opciones reales de inserción en mercados lícitos. El precario estado de las vías rurales vuelve inviable la comercialización de productos agrícolas legales, reforzando la dependencia de la coca como único medio de subsistencia (UNODC-SIMCI, 2023).

Los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) indican que Norte de Santander concentra una proporción significativa de los cultivos de coca del país, aportando cerca del 17% de la producción nacional. No obstante, las principales ganancias del narcotráfico se concentran fuera del territorio, en circuitos financieros urbanos y en los países consumidores, lo que evidencia el carácter profundamente desigual y dependiente de esta economía ilícita (UNODC, 2023).

Las políticas de erradicación forzada y de aspersión aérea con glifosato han demostrado ser ineficaces y profundamente destructivas en términos sociales, ambientales y territoriales, mientras la demanda global de cocaína continúa en ascenso sin cuestionamientos estructurales por parte de Estados Unidos y Europa. En este contexto, las

confrontaciones recientes entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han sido instrumentalizadas para construir narrativas securizadoras que buscan legitimar escenarios de mayor confrontación regional. Parte de esta construcción discursiva ha sido promovida por organizaciones como InSight Crime (2022), cuyas investigaciones, aunque relevantes en el plano descriptivo, presentan en varios casos inferencias que carecen de sustento empírico concluyente. Este enfoque es amplificado y reproducido de manera acrítica por los medios corporativos, contribuyendo a la consolidación de marcos interpretativos funcionales a la militarización del conflicto, que despolitizan su carácter insurgente y silencian dimensiones sociohistóricas y políticas centrales.

Esta dinámica se inscribe, además, en un contexto de creciente conflictividad global, marcado por la emergencia de nuevas potencias y la disputa por el control de cadenas de suministro, territorios ricos en bienes naturales, corredores estratégicos, puertos y rutas marítimas. Todo ello se ve amplificado por estrategias de guerra cognitiva, basadas en la manipulación informativa y la construcción de entornos prefabricados de realidad, que dificultan incluso la comprensión de lo evidente.

En el contexto del surgimiento de un orden multipolar y de la progresiva erosión de la hegemonía estadounidense, el control de América Latina adquiere una centralidad estratégica renovada para Washington. Esta prioridad se expresa de manera particular en la disputa por territorios clave para la proyección de poder regional, entre ellos el Esequibo, la Triple Frontera, diversas zonas portuarias de Ecuador y Perú, la Patagonia y el Catatumbo, entre otras. Este último constituye un espacio geoestratégico de primer orden, al articular una amplia y rica región fronteriza entre Colombia y Venezuela, caracterizada por la concentración de bienes energéticos, minerales y biodiversos, así como por su posición privilegiada para el control de corredores logísticos, poblaciones y flujos transnacionales. En conjunto, estas regiones no sólo concentran valor económico, sino que operan como plataformas territoriales desde las cuales se despliegan, por medios militares, económicos, tecnológicos y cognitivos, estrategias orientadas al control, el disciplinamiento y la subordinación de amplias zonas y países del continente.

Esta orientación se explicita en documentos oficiales de la Casa Blanca, como la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (White House, 2025), conocida como el denominado “corolario Trump”, que reafirma a la región como una zona de dominio exclusivo de Estados Unidos, reactivando lógicas coloniales y un patrón de relaciones internacionales sustentado en la subordinación regional. En una línea de continuidad coherente con esta visión se inscriben las declaraciones de la entonces jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, quien, en 2023, durante una intervención ante el Atlantic Council, afirmó que “América Latina tiene lo que el mundo necesita” y que Estados Unidos “profundizará su juego” en la región (EconoSus, 2023), dejando entrever una estrategia explícita de reposicionamiento geopolítico y control de bienes estratégicos.

La agresión contra Venezuela, en este sentido, no constituye un fenómeno nuevo. Desde hace más de dos décadas, Colombia ha funcionado como enclave desde el cual se han impulsado múltiples acciones ilegales orientadas a la desestabilización del país vecino, apoyo a incursiones mercenarias y paramilitares, operaciones de inteligencia encubiertas y respaldo a actores políticos y militares opositores. El extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, cerrado tras graves escándalos de corrupción, persecución política, asesinatos selectivos, vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, fue señalado incluso por el exdirector de informática del departamento en procesos judicial, como un organismo desde el cual se intentó abrir rutas de narcotráfico por Venezuela y planear acciones de desestabilización, incluidos atentados contra el entonces presidente Hugo Chávez (TeleSUR, 2011).

A estos antecedentes se suman episodios más recientes, como el apoyo del gobierno de Iván Duque a la figura de Juan Guaidó, el desvío de recursos de “ayuda humanitaria”, la quiebra inducida de empresas estratégicas como Monómeros y el ampliamente documentado paso de Guaidó por una ruta irregular de la frontera, escoltado por estructuras paramilitares y narcotraficantes como “Los Rastrojos” (Cañizares, 2019). Del mismo modo, ex-oficiales venezolanos como Clíver Alcalá y Hugo “El Pollo” Carvajal han reconocido intentos de desestabilización con apoyo de agencias estadounidenses, incluida la DEA, mientras eran

acogidos en territorio colombiano pese a los señalamientos en su país de origen por corrupción y narcotráfico (DW, 2020).

La variable no profundizada: insurgencia, frontera y reconfiguración geopolítica

La complejidad del conflicto en el Catatumbo, en tanto espacio de intersección entre dinámicas locales, regionales y globales, exige ampliar el horizonte analítico más allá de las explicaciones dominantes ancladas en el ruido mediático, los marcos institucionales hegemónicos y las narrativas oficiales de seguridad. Estas lecturas tienden a invisibilizar variables estructurales que resultan clave para comprender la configuración real del conflicto. Entre ellas, destaca el papel histórico y político-militar de las insurgencias y en este caso, del Ejército de Liberación Nacional -ELN- en la configuración del equilibrio de fuerzas, en especial, el caso que nos convoca, la frontera colombo-venezolana.

Esta omisión dista de ser fortuita. En el contexto actual de reconfiguración del orden geopolítico internacional, marcado por la transición hacia un escenario multipolar y el progresivo debilitamiento de la hegemonía estadounidense, la política exterior de Washington ha adoptado un carácter crecientemente coercitivo, especialmente en regiones consideradas estratégicas para el control de bienes naturales, corredores logísticos y cadenas globales de suministro como ya se ha anotado.

En este marco, la securitización del territorio, la privatización de la seguridad y la expansión de tecnologías de vigilancia y control se consolidan como dispositivos centrales de disciplinamiento geopolítico, orientados a garantizar el acceso, la extracción y el control de bienes estratégicos, así como la neutralización de toda forma de resistencia territorial y regional.

Es en este contexto donde adquiere relevancia analítica la presencia consolidada del ELN en la frontera colombo-venezolana, que vale decir no es la única región en donde hace presencia, pero esta zona es la más enunciada por su ubicación geoestratégica. Diversos centros especializados en el estudio del crimen organizado y el conflicto armado han documentado e intentan posicionar la idea que el ELN no opera únicamente como una insurgencia de carácter nacional, sino que lo presentan como una organización binacional,

con presencia estable en múltiples estados venezolanos, controlando rutas estratégicas, redes logísticas transfronterizas y capacidad militar suficiente para disputar territorios clave a otros actores armados irregulares (Insight Crime, 2022).

Esta implantación territorial excede ampliamente la lógica del “santuario” insurgente, se trata, más bien, de un entramado de poder armado con funciones políticas, organizativas, económicas y militares, capaz de regular una amplia estructura de relaciones socio-políticas, al tiempo que economías ilícitas, controlar corredores estratégicos y ejercer gobernanza armada en amplias zonas rurales. Desde esta perspectiva, aunque no existe un informe oficial del gobierno estadounidense ni de centros de análisis alineados con sus agencias, que afirme de manera literal que el ELN es “el principal obstáculo” para una incursión desestabilizadora desde Colombia hacia Venezuela, la evidencia empírica e histórica disponible permite sostener analíticamente que su presencia opera además, como una barrera de facto frente a intentos de penetración paramilitar, mercenaria o de fuerzas irregulares funcionales a intereses externos.

El control efectivo de pasos ilegales, corredores estratégicos y zonas rurales clave implica que cualquier operación terrestre de desestabilización regional contra Venezuela, requiere, de manera previa y ahora acelerada, la neutralización o desplazamiento del ELN. La organización no estatal InSight Crime ha documentado que el ELN y elementos de las disidencias de las FARC han echado raíces profundas en el territorio venezolano, operando como una fuerza binacional que domina amplios tramos de la frontera y condiciona las dinámicas de violencia y control territorial entre Colombia y Venezuela. Esta presencia transfronteriza, insisten en su narrativa, se evidencia, por ejemplo, en episodios en que combatientes atravesaron territorio venezolano antes de atacar en Colombia, lo cual revela la complejidad logística y política de cualquier intento de instrumentalizar la frontera como plataforma de presión regional (InSight Crime, 2022; The Guardian, 2025)

Desde esta clave interpretativa, la persistencia del ELN como actor armado con capacidad efectiva de control territorial permite comprender la intensificación reciente de estrategias de desgaste indirecto que articulan el uso instrumental de disidencias armadas,

la reconfiguración de estructuras paramilitares y prácticas propias de la denominada guerra híbrida. Estas dinámicas no se explican únicamente por la disputa de economías ilegales, sino que buscan erosionar de manera progresiva el control insurgente sobre el territorio, un control que bloquea la plena funcionalización geopolítica de la frontera colombo-venezolana.

En este sentido, el Catatumbo emerge como un espacio en disputa para su reconversión en enclave económico transnacional, siguiendo un patrón previamente ensayado en el Urabá antioqueño, un modelo de copamiento territorial basado en la articulación entre violencia armada, acumulación económica y disciplinamiento social mediante prácticas sistemáticas de terror, posteriormente replicado en otras regiones del país.

Este patrón resulta consistente con experiencias ampliamente documentadas en otros escenarios internacionales, donde actores estatales y corporativos han recurrido a fuerzas irregulares, intermediarios armados y economías ilícitas para debilitar resistencias locales antes de avanzar hacia objetivos estratégicos de mayor alcance. El caso Irán-Contras (National Security Archive, 2023) constituye un antecedente paradigmático, durante la década de 1980, redes clandestinas vinculadas al gobierno de Estados Unidos utilizaron el narcotráfico, actores armados irregulares y operaciones encubiertas para financiar y sostener la guerra contrainsurgente contra el gobierno sandinista en Nicaragua, eludiendo controles institucionales y legales (Scott, 2010; McCoy, 2003).

Un patrón similar puede observarse en Afganistán durante la ocupación estadounidense, donde la instrumentalización de señores de la guerra, milicias locales y economías ilícitas, en particular el opio, fue utilizada como mecanismo de control territorial y contrainsurgencia, con efectos devastadores sobre la soberanía y el tejido social del país (Rashid, 2008; Chomsky, 2013). En ambos casos, la convergencia entre guerra irregular, economías criminales y objetivos geopolíticos permitió avanzar procesos de dominación indirecta con altos niveles de negación plausible.

En este marco, la capacidad operacional del ELN y la persistente construcción mediática que lo presenta como amenaza central y en ocasiones como “única amenaza”, amplificada por medios corporativos de comunicación, refuerzan la hipótesis de que esta insurgencia

constituye un actor clave en el equilibrio de fuerzas fronterizas. Su neutralización aparece, por tanto, como un objetivo estratégico para proyectos de reconfiguración violenta del territorio impulsados por una convergencia de intereses entre Estados Unidos, élites locales y corporaciones internacionales, que ven en el Catatumbo un enclave estratégico para el control regional.

Como ilustración de lo anterior es posible evidenciar como actores armados como las disidencias del Frente 33 antiguos enemigos acérrimos de los paramilitares, hoy sean sus aliados en la región e incluso quienes facilitan su ingreso y copamiento territorial de dichos actores; todos estos con el apoyo implícito de la fuerza pública, pues no hay una explicación lógica de como es posible cruzar ciertos corredores donde operan con 6000 efectivos alrededor de seis batallones en todo el territorio. (La Opinión, 2017).

Paramilitarismo, economía de guerra y contrainsurgencia en la frontera nororiental

La guerra que hoy se despliega en el Catatumbo y el avance sostenido del paramilitarismo hacia el nororiente colombiano, no pueden ser comprendidos únicamente como expresiones de criminalidad organizada ni como simples déficits de gobernanza estatal. Se trata, además, de un proceso inscrito en una estrategia geopolítica de mayor alcance, orientada a desmontar el último dique armado insurgente que obstaculiza la plena instrumentalización de la frontera colombo-venezolana como plataforma de proyección regional. En este marco, la neutralización del Ejército de Liberación Nacional -ELN- aparece como una condición estratégica previa para la consolidación de corredores territoriales bajo control de estructuras armadas funcionales a intereses externos-internos, en un contexto de creciente tensión geopolítica hemisférica.

Desde esta perspectiva, la guerra en el Catatumbo debe leerse como parte de un reposicionamiento estratégico del paramilitarismo en Colombia, intensificado tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el posterior incumplimiento estatal en materia de presencia integral, reforma rural y control territorial efectivo en amplias zonas anteriormente bajo influencia de las FARC-EP. Estos vacíos fueron rápidamente ocupados por estructuras paramilitares articuladas de manera orgánica con el narcotráfico y otras economías ilegales

e ilegalizadas, configurando una unidad funcional de control territorial alineada con agendas geopolíticas externas. No se trata, por tanto, de una deriva criminal autónoma, sino de una arquitectura de poder coherente con las lógicas coloniales contemporáneas, en la cual la violencia opera como mecanismo ordenador del territorio al servicio del capital global y sus cadenas de acumulación (Harvey, 2003; Quijano, 2000; Mbembe, 2011).

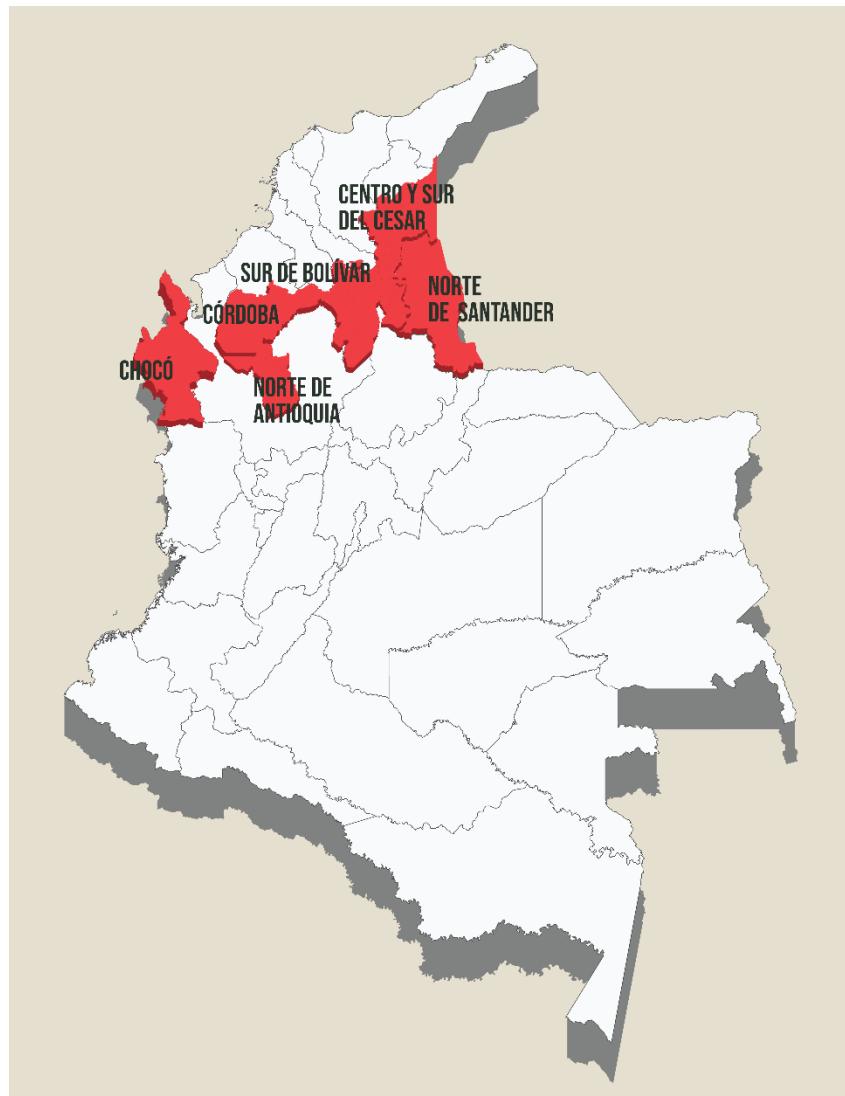
Este modelo combina procesos de acumulación por desposesión, militarización del espacio y reordenamiento coercitivo del tejido social mediante desplazamientos forzados, concentración de la tierra y la reconversión de comunidades rurales en mano de obra precarizada, subordinada a cadenas de valor legales e ilegales que operan sobre los mismos corredores estratégicos. La violencia, lejos de constituir un subproducto indeseado del sistema, se configura, así como un dispositivo estructural de reorganización territorial y disciplinamiento social (Harvey, 2003; Zibechi, 2012).

En este marco, la expansión del Clan del Golfo, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y, más recientemente, Ejército Gaitanista de Colombia -EGC-, se ha producido de forma sostenida, planificada y territorialmente escalonada (La Razón, 2023), con evidentes zonas de coordinación, tolerancia o articulación funcional con sectores de la Fuerza Pública y con autoridades locales y regionales. Este patrón no es novedoso, sino que ha sido ampliamente documentado en la historia reciente del conflicto armado colombiano, particularmente en lo relativo a la convergencia entre paramilitarismo, poder político regional y estrategias contrainsurgentes.

Su despliegue responde a una lógica geoestratégica clara (ver mapa 2) en el caso del corredor estratégico que va desde el Urabá chocoano que conecta con la frontera con Panamá, el Urabá antioqueño, atravesando el norte y nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar, avanzando por el corredor del Magdalena Medio hasta proyectarse sobre el Catatumbo y la frontera nororiental, asegurando enclaves económicos, rutas logísticas y control efectivo del territorio.

Mapa 2

Corredor estratégico



Fuente: Autores (2025).

Este avance no se orienta exclusivamente al control de economías ilícitas, sino que se inscribe en una estrategia de dominación territorial de largo aliento, destinada a reconfigurar la frontera colombo-venezolana como enclave económico transnacional y como espacio políticamente disciplinado, funcional a los intereses de seguridad regional y a las dinámicas de acumulación extractiva. En esta perspectiva, el Catatumbo se consolida no como un

escenario periférico, sino como un nodo estratégico central en la disputa por el orden regional, la soberanía territorial y el equilibrio geopolítico del norte de Sudamérica.

El avance paramilitar va dejando tras de sí una red de enclaves económicos, logísticos y militares que garantizan el dominio efectivo del corredor del Magdalena Medio hacia el Catatumbo. Este despliegue responde a un objetivo estratégico preciso, neutralizar la última resistencia armada que impide utilizar la frontera como plataforma de presión, desestabilización o eventual agresión terrestre contra Venezuela. Se trata de un patrón clásico de guerra irregular y control territorial, ampliamente documentado en conflictos contemporáneos, donde la ocupación progresiva del espacio se acompaña de una reconfiguración económica forzada y de mecanismos sistemáticos de disciplinamiento social (Kaldor, 2013; Escobar, 2008).

Aunque esta expansión resulta altamente costosa en términos operativos, se sostiene mediante una economía de guerra autofinanciada, basada en la convergencia entre minería de oro ilegal progresivamente legalizada, narcotráfico, principalmente cocaína, control de rutas fluviales y terrestres, captura de rentas locales y, en numerosos casos, la cooptación parcial o total de administraciones municipales. Esta articulación entre economías ilícitas e ilegalizadas permite el autosostenimiento de una guerra de copamiento territorial plenamente funcional a intereses extranjeros, tanto corporativos como estatales, con un papel particularmente relevante de Estados Unidos en la arquitectura regional de seguridad (UNODC, 2024).

Uno de los obstáculos (históricos) a esta estrategia ha sido la presencia de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, una organización con alto nivel de formación político-militar y profundo arraigo territorial, que durante décadas ha contenido la expansión paramilitar y ha eliminado actores armados en disputa. Esta persistencia ha obligado al establecimiento, a abordar el despliegue de una estrategia escalonada de desgaste prolongado, coherente con los manuales clásicos de contrainsurgencia y las prácticas de operaciones encubiertas, orientada a erosionar progresivamente su control territorial antes de un eventual desplazamiento definitivo (US Army, 2006; McCoy, 2003).

En este esquema, las disidencias del denominado Frente 33 han cumplido un rol de primera línea de penetración territorial, combinando prácticas mafiosas con discursos de aparente cercanía a procesos sociales y comunitarios. Esta táctica, que articula coerción armada, cooptación social y simulación política, ha sido utilizada de manera recurrente por estructuras paramilitares para legitimar su presencia territorial, fragmentar el tejido organizativo y debilitar resistencias locales desde dentro (Zelik, 2017; CINEP, 2020).

Este desgaste se sostiene mediante un rápido recambio de combatientes, apoyo logístico estatal directo o indirecto y una ofensiva político-mediática orientada a aislar y deslegitimar al ELN. Dicha ofensiva incluye su asociación reiterada, y carente de pruebas concluyentes, con carteles internacionales del narcotráfico, promovida desde escenarios oficiales y amplificada por plataformas digitales y medios corporativos de alto impacto. Este proceso contribuye a la construcción de un entorno cognitivo favorable a la escalada militar y a la naturalización de soluciones armadas, invisibilizando deliberadamente las raíces políticas y sociales del conflicto, negando de facto intentos de negociación nacional.

En este punto, los indicios recientes sobre relaciones opacas entre sectores del Ejército colombiano y disidencias armadas, sumados a antecedentes históricos de cooperación selectiva entre agencias estatales y actores ilegales, permiten formular una hipótesis geopolítica razonable: no resulta descabellado plantear que la DEA esté negociando o articulando con sectores específicos de las AGC, también denominadas Clan del Golfo o, más recientemente, Ejército Gaitanista de Colombia -EGC-, y con disidencias de las extintas FARC-EP, promoviendo su posicionamiento interno como fracciones hegemónicas capaces de ejecutar este objetivo estratégico.

La DEA cuenta con una extensa experiencia histórica en este tipo de operaciones, ampliamente documentada en archivos desclasificados y estudios académicos sobre guerra encubierta, narcotráfico y política exterior estadounidense (Scott & Marshall, 1998; McCoy, 2003). El caso Irán-Contras constituye uno de los ejemplos más paradigmáticos del uso de redes criminales, economías ilícitas y actores armados irregulares para financiar y ejecutar

objetivos geopolíticos encubiertos, una práctica posteriormente replicada en diversos escenarios de África, Asia y Medio Oriente (Scott, 2010; Blum, 2003).

Diversas investigaciones académicas, periodísticas y judiciales han documentado que la DEA y otras agencias de Estados Unidos han tolerado, encubierto o colaborado de manera funcional con redes de narcotráfico en distintos contextos, subordinando la llamada “guerra contra las drogas” a objetivos geopolíticos y contrainsurgentes. Casos como el trato preferencial al Cartel de Sinaloa en México (The Mazatlan Post. 2019), la protección de señores de la guerra vinculados al opio en Afganistán o la relación con estructuras paramilitares en Colombia evidencian un patrón estructural, el narcotráfico no es erradicado, sino administrado selectivamente cuando resulta útil para el control territorial, la desestabilización de gobiernos no alineados o la consolidación de hegemonías regionales. Así, la política antidrogas ha operado más como una tecnología de poder e intervención que como una estrategia real de defensa de la vida, la legalidad o la soberanía de los pueblos.

En este sentido, la expansión acelerada de las AGC, acompañada de tolerancia institucional y articulación con agencias antidrogas, no puede interpretarse como una simple falla del Estado colombiano. Debe ser analizada, además, como parte de una estrategia de contrainsurgencia y reordenamiento territorial orientada a asegurar en el caso que nos convoca, el control fronterizo y a disciplinar políticamente el territorio en función de intereses externos.

El Catatumbo, en consecuencia, no constituye un escenario marginal del conflicto colombiano, sino un espacio central en la disputa por el orden regional, la soberanía territorial y el equilibrio geopolítico del norte de Sudamérica. La guerra que allí se libra no es únicamente contra una insurgencia armada, sino contra cualquier forma de resistencia que impida la consolidación de un modelo de dominación territorial funcional a intereses imperiales y extractivos, incluso cuando estos se presenten bajo discursos de legalidad, seguridad o desarrollo (Mbembe, 2003; Zibechi, 2012).

Conclusiones

Dignidad, resistencias y la urgencia de una ruptura geopolítica

El Catatumbo condensa, con particular crudeza, las contradicciones estructurales del orden regional contemporáneo. Lejos de constituir un escenario periférico o marginal, este territorio emerge como un nodo estratégico donde confluyen extractivismo, militarización, contrainsurgencia y disputa geopolítica global. La guerra que allí se despliega no es un accidente histórico ni una desviación criminal del Estado, sino la expresión concreta de un modelo de dominación territorial que articula intereses imperiales, élites locales subordinadas y dispositivos armados, legales e ilegales, al servicio del despojo.

Frente a esta maquinaria sistemática de violencia y acumulación, persiste una resistencia popular profunda, organizada y digna. Comunidades campesinas, pueblos indígenas y sectores étnicos del Catatumbo han sostenido durante décadas una lucha ininterrumpida por la autonomía territorial, la defensa de la vida y la construcción de formas propias de organización social. Estas resistencias no constituyen un obstáculo para la paz; por el contrario, son su condición de posibilidad. La paz no puede reducirse a anuncios gubernamentales, ceses tácticos o arquitecturas institucionales vaciadas de transformación material. La construcción de paz exige reformas estructurales, redistribución real de la tierra, desmilitarización efectiva del territorio y ruptura con el modelo extractivo que convierte regiones enteras en zonas de sacrificio.

En este marco, resulta insostenible la retórica de paz promovida por distintos gobiernos colombianos, incluido el del progresismo encabezado por Gustavo Petro (2022–2026), cuando sus prácticas, más allá del discurso, evidenciaban una continuidad estructural en la subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos y en la expansión de modelos neoliberales impuestos mediante la violencia. La persistente militarización, la tolerancia frente al paramilitarismo reconfigurado y la alineación acrítica con la agenda de seguridad hemisférica confirman que el cambio ha sido, en gran medida, discursivo antes que material.

El momento geopolítico actual no admite ambigüedades, Venezuela, sometida durante más de dos décadas a una agresión multiforme, económica, diplomática, mediática y encubierta, encarna hoy una lucha por la dignidad, la soberanía y el derecho a la

autodeterminación frente al poder imperial. En este escenario, el papel del Estado colombiano ha sido reiteradamente el de enclave operativo de desestabilización regional, una función que compromete no solo su propia soberanía, sino la estabilidad de toda Sudamérica. Persistir en esta lógica convierte a Colombia en un actor funcional a la guerra permanente, no en un agente de paz.

De allí la urgencia de romper con alianzas militares como la OTAN, absolutamente incompatibles con cualquier proyecto serio de paz regional y soberanía latinoamericana. Tal como lo señalaron de manera colectiva los participantes del II Encuentro Geopolítica, Militarización y Resistencias, realizado en Medellín en noviembre de 2025 que acogió expertos de 9 países, no es admisible continuar participando en un juego geopolítico de colonización y dominación regional, disfrazado de cooperación, seguridad o defensa de los derechos humanos. América Latina no puede seguir siendo tratada como retaguardia estratégica de guerras ajenas.

Resulta igualmente impostergable cumplir de manera integral los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016, así como retomar y honrar los avances logrados en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. En ese proceso se alcanzaron hitos relevantes, como los acuerdos 6 y 9, que daban continuidad a lo pactado durante el gobierno de Santos, y el acuerdo 28, que consolidó una visión compartida de paz con la participación incidente de la sociedad como eje central. Abandonar o dilatar estos compromisos profundiza la desconfianza y alimenta la reproducción de la guerra.

Este llamado interpela de manera directa al campo académico y a la producción de conocimiento. Es imperativo que investigadoras e investigadores cuestionen los marcos analíticos dominantes, atraviesen los sesgos impuestos por la guerra cognitiva y se atrevan a indagar hipótesis que, aunque evidentes, suelen ser eludidas en contextos de polarización y extremismo. Persistir en lenguajes asépticos, neutralidades fingidas o análisis desconectados de las relaciones reales de poder equivale, en el contexto actual, a una forma de complicidad. Desvelar los intereses que se ocultan detrás de discursos humanitarios, antinarcóticos o de gobernanza se convierte hoy en una tarea política ineludible.

La guerra contrainsurgente no es un vestigio del pasado, continúa vigente, reconfigurada, dirigida no solo contra insurgencias armadas, sino contra pueblos organizados, territorios autónomos y proyectos políticos no alineados. En el escenario de transición hacia un orden multipolar, no hay espacio para simulaciones ni acomodamientos convenientes con el poder instituido. El lenguaje de los derechos y la defensa de la naturaleza no puede seguir siendo instrumentalizado para justificar la dominación, ni la paz reducida a un recurso retórico para administrar la guerra.

El Catatumbo, como Venezuela y como tantos otros territorios de Nuestra América, nos coloca frente a una disyuntiva histórica, persistir en un modelo de subordinación, violencia y despojo, o apostar, con coherencia política y ética, por un proyecto de soberanía, justicia social y autodeterminación de los pueblos. Tomar partido no es una opción ideológica; es una responsabilidad histórica.

Referencias

- Blum, W. (2003). *Killing hope: U.S. military and CIA interventions since World War II*. Zed Books. https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/13/130AEF1531746AAD6AC03EF59F91E1A1_Killing_Hope_Blum_William.pdf
- Cañizares, W. (2019, 12 de septiembre). *Juan Guaidó con el grupo narcotraficante Los Rastrojos* [Publicación en X]. <https://x.com/wilcan91/status/1172106194695143424>
- Chomsky, N. (2011). *Power and resistance: Conversations on global justice*. Seven Stories Press.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2023). *El estallido de un trueno ajeno: Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo* (Tomo I). CNMH. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/el-estallido-de-un-trueno-ajeno-memorias-de-sobrevivientes-al-bloque-catatumbo-tomo-i/>
- Comisión de la Verdad. (2022). *Informe final de la Comisión de la Verdad: Recomendaciones*. <https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad>
- Comisión de la Verdad. (2022). *Catatumbo*. <https://www.comisiondelaverdad.co/etiquetas/catatumbo>
- Contraloría General de la República. (2013). *La explotación ilícita de recursos minerales en Colombia: Impactos ambientales y sociales*. <https://www.nuevamineria.com/revista/contraloria-advierte-sobre-el-impacto-en-el-medio-ambiente-por-mineria-ilegal-en-colombia/>

- CINEP. (2020). *EGC en el Chocó: Violencia, poder y miedo*.
<https://cinep.org.co/publicaciones/producto/egc-en-el-choco-violencia-poder-y-miedo/>
- DW. (2020, 28 de marzo). *Exgeneral venezolano se entregó a la policía en Colombia*.
<https://www.dw.com/es/exgeneral-venezolano-buscado-por-estados-unidos-se-entreg%C3%A9-a-la-polic%C3%ADa-en-colombia/a-52948968>
- EconoSus. (2023, 23 de enero). *Las críticas que recibió la jefa del Comando Sur tras enumerar los intereses de Estados Unidos en América Latina*.
<https://economiasustentable.com/noticias/las-criticas-que-recibio-la-jefa-del-comando-sur-tras-enumerar-los-intereses-de-estados-unidos-en-america-latina>
- Escobar, A. (2008). *Territories of difference: Place, movements, life, redes*. Duke University Press. <https://www.dukeupress.edu/territories-of-difference>
- Insuasty Rodríguez, A. (2024, 16 de agosto). *Caravana humanitaria por la vida, la paz y la permanencia en el territorio: Un recorrido por las luchas comunitarias*.
<https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/9955-caravana-humanitaria-por-la-vida-la-paz-y-la-permanencia-en-el-territorio-un-recorrido-por-las-luchas-comunitarias-colombia>
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
https://aklatangbayan.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/03/david_harvey_-_new_imperialism.pdf
- InSight Crime. (2022). *Las guerrillas colombo-venezolanas: La migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela*. <https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2022/10/Las-guerrillas-colombo-venezolanas-la-migraci%C3%B3n-de-la-guerra-de-Colombia-hacia-Venezuela-InSight-Crime-Oct-2022.pdf>
- Isacson, A. (2013). *Time to listen: New trends in U.S. security assistance to Latin America and the Caribbean*. WOLA. <https://www.wola.org/analysis/time-to-listen-new-trends-in-us-security-assistance-to-latin-america-and-the-caribbean/>
- Kaldor, M. (2013). *New and old wars: Organized violence in a global era* (3rd ed.). Polity Press.
- La Opinión. (2017, 30 de diciembre). *En el Catatumbo activan seis nuevos batallones*.
<https://www.laopinion.co/region/en-el-catatumbo-activan-seis-nuevos-batallones>
- La Razón. (2023). *La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2024 por expansión de las AGC en Córdoba*. <https://larazon.co/defensoria-del-pueblo-alerta-sobre-expansion-de-las-agc-en-siete-municipios-de-cordoba/>
- La República. (2013, 28 de abril). *El negocio de la droga en el Bloque Catatumbo*.
<https://www.larepublica.co/economia/el-negocio-de-la-droga-en-el-bloque-catatumbo-2037429>
- Lindsay-Poland, J. (2018). *Plan Colombia: U.S. ally atrocities and community activism*. Duke University Press.

- McCoy, A. W. (2003). *The politics of heroin: CIA complicity in the global drug trade.* Lawrence Hill Books.
- Mbembe, A. (2011). *Necropolítica*. Melusina. <https://archive.org/details/necropolitica.-achille-mbembe-2011>
- National Security Archive. (2023). *El caso Irán-Contra*. <https://nsarchive.gwu.edu/special-exhibits/iran-contra-affair>
- Quijano, A. (2000). Coloniality of power and eurocentrism in Latin America. *International Sociology*, 15(2), 215–232. <https://doi.org/10.1177/0268580900015002005>
- Rashid, A. (2008). *Descent into chaos: The United States and the failure of nation building in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia*. Viking.
- Ronderos, M. T. (2014). *Guerras recicladas: Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Aguilar.
- Scott, P. D. (2010). *American war machine: Deep politics, the CIA global drug connection, and the road to Afghanistan*. Rowman & Littlefield.
- TeleSur. (2011). *Entrevista a Alfredo García, exdirector de informática del DAS* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4c4G-cc0j-A>
- The Mazatlán Post. (2019, 21 de febrero). *U.S. government and top Mexican drug cartel exposed as partners*. <https://themazatlanpost.com/2019/02/21/u-s-government-and-top-mexican-drug-cartel-exposed-as-partners/>
- Tickner, A. B. (2014). *La securitización de la política exterior colombiana*. WOLA. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2014/03/140318_Colombia_US_Security_Cooperation.pdf
- The Guardian. (2025, January 27). *Rebels passed through Venezuela en route to Colombia before deadly attack, report reveals*. <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/27/rebels-passed-through-venezuela-en-route-to-colombia-before-deadly-attack-report-reveals>
- UNODC. (2024). *Resultados del monitoreo a cultivos de coca en 2023*. <https://www.unodc.org/rocol/es/noticias/colombia/monitoreo-de-territorios-con-presencia-de-cultivos-de-coca-2023.html>
- United States Army. (2006). *FM 3-24: Counterinsurgency field manual*. University of Chicago Press. https://icccforum.com/media/background/sanctions/2006-12-15-US_Army_Field_Manual-Counterinsurgency.pdf
- UPME. (2022). *Volumen de exportaciones de minerales asociados al pago de regalías*. <https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/Carbon.aspx>
- Verdad Abierta. (2015). *La encrucijada de los pequeños palmeros del Catatumbo*. <https://verdadabierta.com/la-encrucijada-de-los-pequenos-palmeros-del-catatumbo/>
- White House. (2025, noviembre). *National security strategy of the United States of America*. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf>

- Zelik, R. (2017). *Paramilitarismo: Violencia y transformación social, política y económica en Colombia*. Siglo del Hombre Editores. <https://www.raulzelik.net/buecher/491-paramilitarismo-violencia-y-transformacion-social-politica-y-economica-en-colombia-edicion-en-espanol>
- Zibechi, R. (2012). *Territories in resistance: A cartography of Latin American social movements*. AK Press. https://files.libcom.org/files/Raul%20Zibechi%20-%20Territories%20in%20Resistance_%20A%20cartography%20of%20Latin%20American%20social%20movements.pdf

Notas

¹ Esta es una primera entrega corresponde a un estudio coordinado de manera conjunta por REDIPAZ, CEDINS y KAVILANDO, desarrollado en el marco de la naciente Red Internacional de Estudios sobre Geopolítica, Militarización y Resistencias en Nuestra América, surgida a partir del II Encuentro Internacional realizado en 2025 en la ciudad de Medellín (Colombia).